

C.A. de Santiago

Santiago, trece de diciembre de dos mil veinticuatro.

**VISTOS:**

En este proceso RIT N° 206-2024, RUC N° 2201265738-6, seguido ante el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, se condenó a la acusada **ROCIO FERNANDA CERON VIDAL**, a la pena efectiva de **CINCO AÑOS Y UN DIA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO** y a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua a cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autora del delito consumado de **robo con violencia e intimidación**, cometido el día 16 de diciembre de 2022, en la comuna de Huechuraba.

En contra de esta sentencia la Defensoría Penal Pública ha deducido recurso de nulidad fundada en la causal prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal.

Con fecha tres de diciembre del actual, se procedió a la vista del referido recurso, oportunidad en la que alegaron en estrados, la defensa de la condenada y el Ministerio Público, fijándose la audiencia del día de hoy para la lectura de la presente sentencia.

**Considerando:**

1°.- Que la defensa de la acusada deduce la causal contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es: "Procederá la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia.....b) cuando en el pronunciamiento de una sentencia, se hubiere hecho errónea aplicación del derecho que hubiere influido



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKQVXRFULHR

sustancialmente en lo dispositivo del fallo”; denuncia vulnerado el artículo 1° y 446 N° 3 del Código Penal.

Refiere, que la infracción de derecho radica en que el tribunal entiende erradamente que la lesión que se causa a la víctima, establecida en el hecho acreditado por el tribunal, constituye la violencia que habla el artículo 439 y, termina condenando a su defendida a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por un delito de robo con violencia e intimidación del artículo 436, normas ambas del Código Penal, en circunstancias que de haber aplicado correctamente el derecho habría condenado por un delito de hurto simple del artículo 446 número 3 del código punitivo, imponiendo en consecuencia una pena menor que la impuesta.

Como petición concreta, solicita se anule el fallo y se dicte, sin nueva audiencia, sentencia de remplazo que condene a la acusada a una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de media unidad tributaria mensual como autora de un delito de hurto simple.

**2°.-** Que, la defensa de la acusada, en orden a la recalificación del delito por la cual ha sido condenada, se sustenta en la dinámica de cómo ocurrieron los hechos, en cuanto la violencia ejercida se habría dado de manera posterior al apoderamiento de las cosas que se encontraban al interior del local comercial, no encuadrándose típicamente en lo dispuesto en el artículo 439 del Código Penal, que exige intimidación antes o durante la apropiación, más no de manera posterior, como ocurre en el caso, aseverando que la figura adecuada es el delito de hurto; añadiendo que las lesiones provocadas aparecen desvinculadas de la apropiación.



En síntesis se aduce, que la conducta acreditada en la sentencia no es constitutiva de robo con violencia, pues los actos que se describen como intimidatorios, no reúnen las exigencias del tipo penal; los actos constitutivos de violencia o intimidación se producen cuando el delito ya se había consumado, lo que a su juicio permite recalificarlo al delito de hurto.

**3°.-** Que es de tener presente lo que prescribe el artículo 433 del Código Penal, esto es: “El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado: (...)” El artículo 439, a su vez, prescribe que “Para los efectos del presente párrafo se estimarán por violencia o intimidación en las personas los malos tratamientos de obra, las amenazas ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir la resistencia u oposición a que se quiten, o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega (...)”

Según se desprende de las normas citadas, para la configuración del delito que se atribuye a la condenada, es necesario que la violencia o intimidación y el apoderamiento de cosa ajena, en cuanto elementos normativos, se presenten unidos entre sí por un nexo único aunque de doble variante, fáctica e ideológica: fáctica, dada por la ligazón temporal directa que debe existir entre ambos elementos; e ideológica, en el entendido que dichas acciones deben estar concebidas para –y encaminadas a- permitir el apoderamiento de las especies ajenas con fin de lucro.

**4°.-** Que para la resolución de la controversia traída a conocimiento de esta Corte, debe determinarse si los hechos



intimidatorios y violentos que describe el fallo recurrido encuadran en la descripción típica antes transcrita y, concretamente, si tales conductas se han verificado efectivamente “antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad”, desplegadas “ya para impedir la resistencia u oposición a que se quiten las especies sustraídas, o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega”.

5°.- Que, ahora bien, señalado lo anterior, es necesario dejar asentado con relación a esta causal de nulidad, que no es posible discutir los hechos fijados en la sentencia definitiva, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 385 del Código Procesal Penal.

Es así que los sentenciadores, en el considerando decimotercero del fallo, desestimaron pormenorizadamente la tesis de recalificación de la defensa y, en el motivo décimo cuarto dieron por acreditados los hechos en virtud de los que aplicaron la norma que se estima infringida por la defensa y, en lo particular, se establece “... quienes *corren detrás de ellos para recuperar las especies*, siendo alcanzada la acusada por la víctima Renato Alfaro, logrando recuperar el monitor desde las manos de la acusada Cerón Vidal. Ante ello la acusada *bota a la víctima, la que cae al suelo, para luego intimidarla, diciéndole a su acompañante “sácale la pistola, sácale la pistola”, comenzando ambos acusados a golpearlo en múltiples oportunidades* en diferentes partes del cuerpo...”, asimismo, “Producto de la agresión sufrida por *la víctima Renato Alfaro Cerón resultó con lesiones clínicamente leves, consistentes en escoriaciones en cadera derecha, pierna izquierda y herida en dedo de mano izquierda*”.



6°.- Que en primer término, y en lo que concierne al argumento de la defensa en cuanto a que los actos violentos e intimidatorios habrían tenido lugar una vez consumado el delito, estima esta Corte, que la esfera de resguardo de las especies sustraídas no se agota necesariamente en la línea de lo ocurrido al interior del local comercial, ni en una concepción física, rígida y restringida del ámbito de custodia, como sostiene la defensa, sino que su límite está dado por la efectiva vulneración -con violencia o intimidación- de las medidas de resguardo adoptadas por la víctima, que le permite al autor generar una nueva esfera de custodia para comportarse como señor y dueño de la cosa sustraída y disponer de ella.

Se trata, en fin, de un concepto normativo abstracto y no físico, espacial o geográfico, que por lo mismo puede variar de un caso a otro; o como dice Olave, “la custodia es una relación fáctica entre un sujeto y un objeto, relación que emana de la facultad del dueño de excluir a otros del uso, goce y disposición de la cosa” (Olave, Alejandra, “El delito de hurto como tipo de delito de resultado”, Polít. Crim. Vol. 13, N° 25, p. 179), criterio sustentado además por el texto del artículo 439 del CP, cuando alude a aquellas conductas encaminadas a evitar que las especies “se quiten”.

En este entendido, debe considerarse que los actos de amedrentamiento y violencia descritos en la sentencia fueron ejecutados precisamente para amedrentar en cada caso a la víctima y doblegar su voluntad, observándose entre tales comportamientos y el propósito de apropiación y disposición de los bienes respectivos una concatenación cronológica y psicológica que no puede desvirtuarse por la sola distancia de ocurrencia de dichos actos -mayor o menor y por



lo mismo relativa-, medida desde la línea del local comercial involucrado.

7°.- Que en consecuencia, dado lo ya razonado, debe concluirse que no existe error de derecho, desde que sobre la base de los hechos asentados en el fallo, no se configura.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 372 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensor penal público en contra de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, con fecha dieciocho de octubre de este año, la que, consecuentemente, no es nula.

**Regístrese, comuníquese y devuélvase.**

**Redacción de la Ministro Sra. Barrientos**

**N°Penal-6279-2024.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKQVXRFULHR

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Elsa Barrientos G., Ministra Suplente Soledad Orellana P. y Abogada Integrante Catalina Infante C. Santiago, trece de diciembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a trece de diciembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XKQVXRFULHR